

Balance futurista

Eduardo Engel*

¿Cuáles acontecimientos de este movido 2002 incluirán los libros de historia que se escribirán dentro de cincuenta años? Tres son, a mi juicio, los candidatos obvios: la serie de escándalos del mundo de la política, los tratados de libre comercio y el paro de los micreros del mes de agosto.

Partamos por la opción menos obvia, el paro de los micreros. La forma en que el gobierno encaró dicho paro echó por tierra el mito de que no se puede enfrentar a los grupos de presión en democracia. La legitimidad que da a un gobierno haber sido elegido democráticamente, usada en forma inteligente, es una herramienta muy poderosa para enfrentar a los grupos de interés.

Si la exitosa gestión del gobierno a propósito del paro de los micreros pasa o no a los textos de historia dependerá de si fue un cambio de tendencia o sólo una aislada golondrina. La respuesta la sabremos en los meses que vienen, cuando veamos si el gobierno es capaz de doblarle la mano a un segundo grupo de presión. Los posibles candidatos incluyen al sector salud, la CUT y varios lobbies empresariales. La importancia de lidiar con los grupos de presión radica en que frecuentemente éstos son los principales obstáculos para llevar a cabo reformas que se requieren urgentemente para alcanzar los umbrales del desarrollo dentro de las próximas décadas.

Pasemos a los tratados de libre comercio (TLC). De todas las reformas económicas llevadas a cabo en las últimas décadas, la más importante fue la apertura de la economía. Dicha apertura terminó con el poder monopólico que detentaban diversas empresas de los sectores productivos más diversos. Para los bienes transables (aquellos con costos de transporte razonables), la mera amenaza de importaciones tuvo efectos impresionantes sobre la productividad de la industria nacional. Los precios cayeron, la calidad de los productos mejoró y muchas industrias se vieron obligadas a competir por primera vez.

Los TLC con la Unión Europea y los Estados Unidos consolidan el rol clave que juega en nuestra economía la apertura comercial. Más de un sector que contaba con protecciones especiales deberá, a más tardar dentro de doce años, competir en serio. La otra cara de la moneda es que, al eliminar todo tipo de trabas (arancelarias y de otro tipo) para acceder a los mercados más importantes del planeta, se facilitan nuevas incursiones chilenas en mercados internacionales, haciendo más probable que se repitan experiencias exitosas como aquella de la industria vitivinícola.

Pasemos, finalmente, a los escándalos políticos que han copado la agenda informativa durante los últimos meses. La inmensa mayoría de nuestra clase política, tanto en el gobierno como en la oposición, no ha estado a la altura de las circunstancias. La crisis actual ofrece una oportunidad única para introducir cambios claves al funcionamiento de la política; desgraciadamente no es obvio que esto vaya a suceder.

A modo ilustrativo, vale la pena considerar el caso de la denuncia sobre conflictos de interés del Presidente del Senado a propósito de la votación de la Ley de Pesca. El principio en cuestión es elemental: si un parlamentario tiene intereses económicos en una empresa, no debe votar leyes que afectan de manera importante los retornos de dicha empresa. Menos aun participar en el diseño de dichas leyes.

A la luz de lo anterior me parece inapropiada la reacción del Presidente del Senado luego de que se denunciaran sus conflictos de interés. Lamentable, también, fue la reacción de la clase política, desde destacados miembros del ejecutivo hasta parlamentarios de derecha, quienes cerraron filas detrás del senador Zaldívar. No comparto la visión económica o política de los denunciantes, pero en esta oportunidad tenían toda la razón.

La mayoría de los escándalos de probidad recientes tienen su origen en la más absoluta falta de información existente respecto de cómo se financia la política. Se requiere saber quién financia a los partidos y sus candidatos, también se debe auditar el uso de dichos recursos. El financiamiento privado de la política debe provenir exclusivamente de personas, excluyendo a empresas; además debe existir un tope al monto que puede contribuir cada individuo a una campaña o candidato determinado. También es importante que exista un financiamiento estatal de la política, para asegurar que los ciudadanos sin recursos sean representados. Además de atacar la que probablemente sea la principal causal de corrupción, las medidas anteriores limitan de manera importante la influencia del poder económico sobre la agenda pública.

Volviendo al caso de los conflictos de interés en las votaciones parlamentarias, dos son las opciones que se manejan a nivel internacional para lidiar con estas situaciones. La primera es que quienes ingresan al parlamento transfieren todos sus ahorros a bonos estatales, fondos mutuos o alternativas similares. La segunda es la creación de un fondo fiduciario ciego. En tal caso el parlamentario entrega la administración de su patrimonio a un tercero, que lo maneja a discreción. Lo central de esta alternativa es una serie de salvaguardas para evitar toda comunicación entre el parlamentario y quienes manejan sus inversiones.

Medidas como las anteriores deben ser complementadas con otras medidas, además de la ya mencionada transparencia en el financiamiento electoral. Por ejemplo, los fondos con que cuentan los parlamentarios para asesorías técnicas efectivamente deben ser utilizados para tal efecto,

redundando así en mejores políticas. También es impresentable que no haya fácil acceso a la votación histórica de cada parlamentario, lo cual facilita la ‘captura’ de parlamentarios por intereses particulares. Finalmente, se requiere reducir sustancialmente el número de cargos políticos (los mal llamados cargos de confianza presidencial).

Si los sucesos del año que termina llevan a que finalmente se transparente el financiamiento de la política y a una reducción importante del poder de los grupos de interés, el 2002 puede pasar a la historia como un año clave para alcanzar el umbral del desarrollo en un futuro cercano. En caso contrario será el año de los TLC, y de varias oportunidades perdidas.

***Eduardo Engel es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Yale.**